



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 195 -2026-GR-JUNÍN/GGR

Huancayo, 25 JUN. 2026

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

VISTOS:

El Informe de Precalificación N° 287-2026-GRJ-ORAF/ORH/STPAD de 23 de junio de 2026, remitido por la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín, y;

CONSIDERANDO:

Que, es política del Estado y del Gobierno Regional de Junín, adoptar las medidas correctivas a los actos administrativos irregulares que incurren los servidores civiles de la Administración Pública, a fin de moralizar y mejorar la calidad y eficiencia del servicio a la sociedad, en el ámbito de su competencia;

Que, mediante Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, y su Reglamento mediante Decreto Supremo N° 040 2014-PCM, estableció un nuevo Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, que se aplican a todos los servidores civiles comprendidos en los régimen laborales del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 1057, que regula Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, las cuales se rigen bajo las reglas procedimentales del régimen de la Ley N° 30057. Las faltas atribuidas a los servidores civiles serán las que corresponden en el momento en que ocurrieron los hechos;

Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala que el régimen disciplinario y procedimiento sancionar previsto en la citada Ley N° 30057, se encuentra vigentes desde el 14 de setiembre del 2014;

Que, por otro lado, la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSO "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", fue aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°101-2015-SERVIR-PE, modificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-216-SERVIR-PE, que desarrolla la aplicabilidad de las reglas del régimen disciplinario y procedimiento administrativo sancionador que establece la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento;

Que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución N° 101-2015-SERVIR/PE, la presente resolución se estructura conforme a lo establecido en el Anexo D: Estructura del acto que inicia el PAD de la referida norma;



GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	10419836
EXP. N°	06755444



Que, a través del oficio N° 001896-2025-CG/GRJU, de fecha 15 de diciembre del 2025, dirigido al Gobernador Regional – Zósimo Cárdenas Muje, donde se notifican con el informe de auditoría N° 24397-2025-CG/GRJU-AC, recomendándose el inicio del procedimiento Administrativo a los funcionarios y servicios públicos involucrados en los hechos observados, así mismo, debiendo informar al Órgano de Control Institucional, las acciones adoptadas;

Que, con el **Memorando N° 03073-2025-GRJ/GR**, emitido por el Gobernador Regional, Zósimo Cárdenas Muje, el día 15 de diciembre del 2025, dirigido al Gerente General Regional, remitiendo el Oficio N° 001896-2025-CGR&GRJU, señalando que el Gerente Regional de Control II de la Gerencia Regional de Control de Junín de la Contraloría General de la República, comunica el Informe de Auditoría N° 2439-2025-CG-GRJU-AC;

Que, con el **memorando Múltiple N° 018-2026-GRJ/GGR**, emitido por el Gerente General Regional, Econ. Roy Tomas Gonzales Mayta, del 14 de enero del 2026,, dirigido a la Abogada Edith Quiñonez Riveros, con el finde notificar con el Informe de Auditoría N° 24397-2025-CG/GRJU-AC, denominada "Ejecución y liquidación de obra: Construcción del pequeño sistema Electrónico de Betania – Electrificación de 8 localidades de la cuenca del Rio Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín – Expediente de Saldo" pasó mismo para coordinar de la disposición de las acciones necesarias que permitan asegurar la implementación de las recomendaciones Y/O el deslinde de responsabilidades, determinando el grado de cumplimiento de las mismas y sean comunicadas a la OCI de la Entidad;

I. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGADA Y PUESTO DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA FALTA

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	D.N.I.	CARGO	CONDICIÓN DE VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	DIRECCIÓN
1	IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS	19932099	TESORERA Y COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN	CONTRATADO D.L N° 1057	PASAJE LOPEZ N° 145 – EL TAMBO – HUANCAYO

La funcionaria pública antes identificada, ocupo el cargo de **COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN**, por lo que se le viene investigando por los hechos descritos durante el periodo que ocupo dicho cargo, esto desde el 18 de abril al 16 de julio de 2023 y como **TESORERA**, desde el 02 de noviembre de 2020 al 03 de abril de 2023, conforme se tiene de los medios probatorios obrantes en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 24397-2025-2-GRJU-AC.

La individualización de las imputada, permite asegurar los siguientes aspectos de orden procesal:



- a) Que, el proceso disciplinario se centre contra una persona cierta y determinada y no contra personas ajenas a los hechos o eventuales homónimos.
- b) Que, se puedan solicitar y dictar si fuere el caso las medidas cautelares antes o durante el proceso disciplinario, así como las sanciones personales que correspondan conforme a la Ley N° 30057 – Ley del servicio Civil.
- c) Y finalmente, la debida individualización del imputado permite garantizar el derecho constitucional de defensa, que lo ampara como a todo sujeto que es pasible de ser investigado y/o procesado.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA FALTA, IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS SEÑALADOS E IDENTIFICADOS PRODUCTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 24397-2025-2-GRJU-AC Y MEDIOS PROBATORIOS OBRANTE EN ELLOS Y PRESENTADOS Y OBTENIDOS DE OFICIO:

Que, a través del INFORME DE AUDITORIA N° 24397-2025-2-GRJU-AC, se tiene que la materia de control comprendió la revisión y análisis efectuada a la documentación administrativa proporcionada por la Entidad, en relación a la obra **"EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - EXPEDIENTE DE SALDO"**;



Que, la materia de control comprende el proceso de ejecución, la recepción y liquidación de la Obra "Construcción del Pequeño Sistema Eléctrico de Betania - Electrificación de 08 Localidades de la Cuenca del Río Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín - Expediente de Saldo", con un costo total de inversión de S/14 168 123,92; donde se ha evidenciado que funcionarios y/o servidores públicos;

- Validaron siete (7) suspensiones de plazo de ejecución de Obra, de las cuales tres (3) de ellas no se enmarcaron en las causales establecidas en la normativa de Contrataciones del Estado, extendiendo dicho plazo, imposibilitando así la aplicación de penalidades por retraso o mora.
Tramitaron y aprobaron la solicitud de ampliación de plazo, pese a que el Consorcio Betania no justificó la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, ampliación de plazo que no correspondía aprobarse; asimismo, dieron trámite y aprobaron la solicitud de ampliación de plazo, la misma que contenía la ejecución de la partida 11.05 Válvula de Emergencia por doce (12) días calendario pese a que esta fue deducida en el Deductivo de Obra n.º 2; situación con la que se otorgó ventaja al Consorcio Betania extendiendo el plazo de ejecución de Obra.
- Aprobaron el cambio de residente de Obra, pese a que la sustitución no fue justificada, la misma que no fue advertida por el Jefe de Supervisión.

No aplicaron penalidades por retraso o mora al Consorcio Betania pese a que la Gerencia Regional de Control de Junín advirtió partidas no ejecutadas y partidas



parcialmente ejecutadas, evidenciándose que la Obra no se culminó el 23 de agosto de 2023 como señala el certificado de conformidad técnica, partidas que fueron identificadas y reveladas en el Informe de Visita de Control n.º 28777-2023-CG/GRJU-SVC de 21 de noviembre de 2023 realizado por la Gerencia Regional de Control Junín; situación que habría generado perjuicio económico a la Entidad por la penalidad máxima (10% del monto contractual vigente) ascendente a S/1 416 812,39.

- Excedieron los plazos para el pago de las valorizaciones del contrato de Obra correspondiente a los meses de marzo, mayo, junio y julio de 2021, mayo y julio de 2022, enero, junio y agosto de 2023; así como, de las valorizaciones del adicional de Obra n.º 1 de los meses de marzo, noviembre y diciembre de 2022, y agosto de 2023; y de las valorizaciones del adicional de Obra n.º 2 de los meses de noviembre de 2022 y agosto de 2023, los mismos que generaron intereses legales que fueron pagados como parte del saldo a favor del Consorcio Betania; situación que habría ocasionado perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/4 169,98.

Que, la materia comprometida corresponde a la ejecución de la obra: "Construcción del Pequeño Sistema Eléctrico de Betania - Electrificación de 08 Localidades de la Cuenca del Rio Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín - saldo de obra", donde se advierte que el Consorcio Betania, y el Consorcio C&O acordaron las suspensiones de plazo Ns 2, 4 y 6 sin acreditar las causales establecidas en la normativa de contrataciones del Estado para todo el periodo suspendido, las cuales fueron permitidas y consentidas por el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura; asimismo, el Subdirector de Abastecimiento y Servicios Auxiliares denegó las solicitudes de cambio de residente, pese a que cumplían con el perfil técnico exigido en las bases integradas; con lo que se extendió el plazo de ejecución de la obra en ciento cincuenta y ocho (158) días calendario a favor del Consorcio Ejecutor;

Que, de otro lado, se evidencia que el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, tramitaron la solicitud de cambio de residente de obra a pesar que el Consorcio Betania no justificó los motivos de la sustitución del personal acreditado, y se comunicó la procedencia de un profesional que no cumple los requisitos con relación a la formación académica exigida en las bases integradas, así como, el Subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, otorgó la procedencia del cambio de residente de obra pese a que el profesional propuesto para el reemplazo no cumplió con el perfil técnico profesional establecido en las bases integradas y lo estipulado en el contrato;

Que, igualmente, el Jefe de Supervisión, Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura aprobaron la ampliación de plazo n.º 3 pese a que esta contenía el plazo de ejecución de la sub partida "1.11.03.02 VALVULA DE EMERGENCIA", la misma que fue deducida en el expediente técnico¹ de adicional

¹ Aprobado a través de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.º 527-2022-G.R.-JUNÍN/GRI de 31 de agosto de 2022 por el señor Anthony Glen Ávila Escalante, gerente regional de Infraestructura.





y deductivo vinculante de obra n.º 2, en virtud de la cual, se otorgó a favor del Consorcio Betania doce (12) días calendario de ejecución adicional sin sustento técnico, con lo que se extendió el plazo de ejecución de la obra a favor del citado Consorcio; asimismo, esta ampliación ocasionó la ampliación de plazo n.º 2 al contrato del servicio de consultoría para la supervisión de la Obra, reconociéndose doce (12) días calendario a favor del Consorcio C&O por el monto de S/15 809,96, en perjuicio de la Entidad;

Que, por otro lado, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras no advirtió sobre la aplicación de otras penalidades como son: inasistencia del personal técnico propuesto y la ausencia de los equipos en Obra, pese a que fue comunicado por el Jefe de Supervisión; asimismo, el Subdirector de Abastecimiento y Servicios Auxiliares no efectuó el cálculo y cobro al Consorcio Betania de las mencionadas penalidades establecidas en los ítems 2 y 9 de la Cláusula Décima Quinta del Contrato n.º 124-2020/GRJ/ORAF de 14 de diciembre de 2020; lo que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por un monto de S/60 289,82;

Que, así también, los Jefes de Supervisión no exigieron a los Residentes de obra la presentación de los protocolos correspondientes por las pruebas y/o ensayos de la calidad del concreto; del mismo modo, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, pese a que en el trámite de algunas valorizaciones tomaron conocimiento de la falta de pruebas o ensayos, donde de acuerdo a lo señalado por el Consorcio Betania iban a ser adjuntadas en la siguiente valorización, no se pronunciaron sobre la falta de entrega de estos protocolos de calidad y la aplicación de penalidades a las que eran pasibles, por el contrario otorgaron su aprobación y conformidad, respectivamente; lo que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por el monto total de S/55 451,07 por la inaplicación de otras penalidades;

Que, de otro lado, el Jefe de Supervisión, Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Subgerente I(e) de Estudios, y Gerente Regional de Infraestructura, quienes estuvieron a cargo de la evaluación del expediente técnico de adicional y deductivo vinculante de obra n.º 1, gestionaron, viabilizaron y aprobaron a través de este, subpartidas contenidas ya en el expediente técnico de saldo de obra, al margen de la normativa de contrataciones del Estado y directiva interna, pese a que lo adjudicado y contratado con el Consorcio Ejecutor contenía en los términos ofertados las subpartidas para el mantenimiento, instalación y funcionamiento de la turbina hidráulica tipo Francis, con lo que se permitió incrementar los costos de las mencionadas subpartidas a favor del Consorcio Betania, y se ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/178 631,86;

Que, del mismo modo, se advierte que el Jefe de Supervisión, encargado del seguimiento y monitoreo, Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura, dieron opinión favorable para el pago de la valorización de obra n.º 12, en la que se contempló la ejecución de las subpartidas "02.14 TUBERIA PVC DE 2" DE 1.70 M. DE LARGO" y "14.15 SISTEMA DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA (POZO A TIERRA CASA FUERZA) -MAT. FALTANTE", del expediente técnico de saldo de obra pese a que no fueron ejecutadas; asimismo, el Comité de Recepción no observó la falta de ejecución de las citadas subpartidas en el acta de pliego de observaciones, ni exigieron la ejecución de las mismas, contrariamente recibieron la





obra dando por absuelta todas las observaciones; con lo que se ocasionó que lo pagado por ambas subpartidas se configure en perjuicio económico a la Entidad por S/17 984,65;

Que, asimismo, en la etapa de recepción de obra, se advirtió subpartidas no ejecutadas, subpartidas parcialmente ejecutadas, y trabajos no ejecutados expuestos en el informe de visita de control n.º 28777-2023-CG/GRJU-SVC de 21 de noviembre de 2023, el cual fue puesto de conocimiento ante la Entidad, lo cual también fue advertido por el Comité de Recepción a través del acta de pliego de observaciones; situación que estaba sujeta a la aplicación de penalidades por retraso o mora conforme lo establece la normativa de contrataciones del Estado; sin embargo, dicho retraso no fue comunicado por el Comité de Recepción por ende no fueron cobradas al Consorcio Betania; de igual manera, tampoco comunicó sobre la aplicación de otras penalidades al Consorcio C&O por el monto de S/15 982,54, como consecuencia de que la obra no se encontraba culminada, y que este último emitió la certificación de culminación, lo que se configura perjuicio económico;



Que, finalmente, se ha evidenciado que el Consorcio Betania a través de la liquidación técnica financiera solicitó el reconocimiento de los intereses legales generados por la demora en el pago de las valorizaciones contractuales de obra y valorizaciones de adicionales de obra, debido al incumplimiento de los plazos en los que incurrieron el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Coordinador de Obra, Encargado del seguimiento y monitoreo, Coordinador de Fiscalización, y Coordinadora de Tesorería (unidades orgánicas inmersas en la gestión de dichos pagos), ocasionando así que las valorizaciones antes señaladas no sean pagadas por la Entidad en fecha no posterior al último día del mes siguiente de la que correspondió cada una de las valorizaciones; situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/4 169,98;

Que, en ese sentido, los funcionarios y servidores públicos en las situaciones antes expuestas en las que se advierte el haber extendido el plazo de ejecución sin sustento técnico y las que no se enmarcaron en la normativa de contrataciones del Estado, con su accionar imposibilitaron la aplicación de penalidades por mora o retraso de forma reiterada; sin embargo, en observancia al numeral 161.2 del artículo 161 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la penalidad máxima a ser aplicada al Consorcio Betania por este motivo solo puede darse hasta el 10% del monto contractual, ual alcanza a S/1 416 812,39; asimismo, con relación a otras penalidades estas no fueron cobradas por S/115 740,89, y otros aspectos en perjuicio de la Entidad por S/232 578,99; con lo se ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/1 765 132,27, conforme se desglosa y detalla en el Informe de Auditoría de Cumplimiento;

Que, en suma de las **OBSERVACIONES**, tenemos que "DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE DIERON SUSPENSIONES DE PLAZO, CAMBIOS DE RESIDENTE DE OBRA, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y ADICIONAL DE OBRA EN CONTRAVENCIÓN DE LA NORMATIVA; ASIMISMO, SE IMPOSIBILITÓ LA APLICACIÓN DE PENALIDADES, SE PAGÓ POR PARTIDAS NO EJECUTADAS Y PARCIALMENTE EJECUTADAS Y SE RECONOCIÓ EL PAGO DE INTERESES LEGALES POR DEMORA, CON LO QUE SE EXTENDIÓ E IMPOSIBILITÓ EL ACCESO A LA



DOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRIFICACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, ADEMÁS, DE AFECTAR EL BUEN USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN DESMEDRO DEL ERARIO PÚBLICO, LO QUE OCASIONÓ PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/1 765 132,27;

DELIMITACION DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS CON POSIBLE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE A LA INVESTIGADA IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS:

Que, conforme al análisis y revisión de la documentación obrante el expediente disciplinario se tiene que la citada servidora doña: Iris Virginia Povis Ramos, en su condición de **Tesorera y Coordinadora de Fiscalización**, resulta ser pasible de responsabilidad administrativa, porque en su condición de Tesorera, el día 25 de enero de 2023 giro a favor del Consorcio Ejecutor por el pago de la valorización N° 4 de adicional de obra N° 1, correspondiente al mes de noviembre 2022, para lo cual se le remitió el expediente previamente con proveído de 26 de diciembre de 2022 al memorando N° 4501-2022-GRJ/GRI, es decir, tardó veintidós (22) días hábiles para dicho trámite, incumpliendo el plazo establecido en los numerales 17 al 29 del MAPRO que señala para este trámite el plazo de tres (3) días, cuatro (4) horas y cuarenta y cinco (45) minutos desde su registro y recepción del pago por el Consorcio Ejecutor, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: "a) *Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones*", situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/664,99 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.



Asimismo, en su condición de Coordinadora de Fiscalización, es pasible de responsabilidad administrativa, al haber emitido el proveído con fecha 23 de octubre de 2023 al memorando N° 2710-2023-GRJ/GRI, a través del cual *devolvió a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el expediente de la valorización N° 9 del adicional de obra N° 1 correspondiente al mes de agosto 2023 con las observaciones*, la cual se le fue remitida previamente con proveído de 26 de setiembre de 2023 al mismo memorando para su atención, es decir, tardó diecinueve (19) días hábiles de su recepción, lo que incumplió el plazo establecido en los numerales 14 y 15 del MAPRO que señala un plazo total de dos (2) días desde la recepción hasta la derivación a Contabilidad, es así que, incumpliendo el plazo antes expuesto no se cauteló tampoco el establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: "a) *Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones*"; situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/12,26 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.

De igual manera, se le atribuye responsabilidad, porque en su condición de **Tesorera**, realizó el giro a favor del Consorcio Ejecutor el 25 de enero de 2023 por la valorización



N° 1 del adicional de obra N° 2 correspondiente al mes de noviembre 2022, la cual se le fue remitida previamente mediante proveído de 27 de diciembre de 2022 al memorando N° 4537-2022-GRJ/GRI de 16 de diciembre de 2022, es decir, tardó veintiún (21) días hábiles para dicho trámite, incumpliendo el plazo establecido en los numerales 17 al 29 del MAPRO que señala para este trámite el plazo de tres (3) días, cuatro (4) horas y cuarenta y cinco (45) minutos desde su registro y recepción del pago por el Consorcio Ejecutor; por lo tanto, tampoco se cauteló el plazo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además, de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"*; situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/514,17 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.

Así también, se le encuentra responsable, porque en su condición de **Coordinadora de Fiscalización**, mediante proveído de 27 de octubre de 2023 al memorando N° 2711-2023-GRJ/GRI, devolvió a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el expediente de la valorización N° 6 del adicional de obra N° 2 correspondiente al mes de agosto 2023 remitió la valorización a la Coordinación de Contabilidad para proseguir con el procedimiento según corresponda, la cual previamente se le fue remitida mediante proveído de 26 de setiembre de 2023 al mismo memorando; es decir, tardó veintitrés (23) días hábiles para realizar dicho trámite desde su recepción, lo que incumplió el plazo establecido en los numerales 14 y 15 del MAPRO que señala un plazo total de dos (2) días desde la recepción hasta la derivación a Contabilidad, es así que, incumpliendo el plazo antes expuesto tampoco cauteló el establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"*, situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/27,48 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.

Es así que, con su participación en su condición de **Tesorerera y Coordinadora de Fiscalización** se afectó el normal y correcto funcionamiento de la Administración Pública, así también, se extendió e imposibilitó el acceso a la dotación del servicio básico de electrificación a la población beneficiaria siendo esta la finalidad pública de la obra, además de afectar el buen uso y destino de los recursos públicos en desmedro del erario público, con lo que se habría ocasionado perjuicio económico a la Entidad por S/. 1 218,90.

Por tanto, estando a los hechos anteriormente expuestos configurarían presunta responsabilidad administrativa, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de las instancias competentes.

III. NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA



Que, de las conductas vertidas se tiene que la investigada doña: **IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS** en su condición de **Coordinadora de Tesorería y Coordinadora de Fiscalización** habría cometido la presunta falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, "Son faltas de carácter disciplinarios que, según su gravedad pueden ser sancionados con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

Artículo 85: literal d) de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil	"La negligencia en el desempeño de sus funciones"
---	--

Las conductas infractoras descritas se subsume en el artículo 85 literal d) **Negligencia en el desempeño de las funciones**, de la Ley del Servicio Civil N° 30057, toda vez que, incumplió las funciones de **Coordinadora de Fiscalización**, establecida en los literales a), b) y k) del artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobada con Ordenanza Regional N° 357-GRJ/CR de 9 de diciembre de 2021, correspondiente a la Oficina de Tesorería, que indica: " a) *Gestionar los procesos vinculados a la gestión del flujo financiero en la entidad conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería*", "b) *Proponer y aplicar normas, lineamientos y directivas internas, así como realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería*", y "k) *Coordinar e integrar adecuada y oportunamente las operaciones de tesorería con las unidades orgánicas o responsables de otros sistemas vinculados con la administración financiera, recursos y servicio*".

Así también, incumplió las funciones específicas establecidas en los literales b) y e) del cargo Tesorero, N° de plaza 162 del Manual de Organización de Funciones -MOF, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 645-2003-GR-JUNIN/PR de 11 de setiembre de 2003 que señala: "b) *Dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de los programas de la entidad, de acuerdo con las normas de procedimiento de pago de Tesorero Público y a las normas del sistema de Tesorería*", y "e) *Supervisar y controlar los registros de la Fase Grado de SIAF, de la Unidad Ejecutora 001 Sede Junín del Pliego 450 GR/JUNIN*".

Se evidencia la existencia de una relación causal o vinculación de su conducta con el efecto irrogado, toda vez que, el señor **Iris Virginia Povis Ramos**, en ejercicio de su cargo actuó con dolo en el incumplimiento de sus funciones como **Tesorera y Coordinadora de Fiscalización**, toda vez que, estaba en condiciones de cumplir los plazos establecidos en el MAPRO, causando perjuicio económico a la Entidad de S/1 218,90.

Por lo que, transgredió lo establecido en el numeral 9.1. del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; numerales 14 y 15, y del 17 al 29 de la descripción del procedimiento, y literal a) del numeral 8 del procedimiento: pago de valorizaciones a contratistas, del MAPRO; cláusulas segunda y





sexta del contrato N° 124-2020/GRJ/ORAF de 14 de diciembre de 2020. Es así que, con su participación se afectó el normal y correcto funcionamiento de la Administración Pública, así también, se extendió e imposibilitó el acceso a la dotación del servicio básico de electrificación a la población beneficiaria siendo esta la finalidad pública de la obra, además de afectar el buen uso y destino de los recursos públicos en desmedro del erario público, con lo que se ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/. 1 218,90.

Así también. vulneró el numeral 1.1 y 1.11 del artículo IV del título preliminar del Texto Único Ordenando de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que dispone: "1.1 Principio de Legalidad".- "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas" y " 1.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, (...)".

Asimismo, inobservó el literal c) del artículo 16 y artículo 19 de la Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público, publicado el 19 de febrero de 2004, vigente desde el 1 de enero de 2005, que establece: literal c) del artículo 16 **"Salvaguardar los intereses del Estado (...)".** artículo 19 **"Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".**

IV. FUNDAMENTACION DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE RECOMIENDA EL INICIO DEL PAD:

Que, dentro de la Administración Pública, el procedimiento administrativo disciplinario tiene como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos, aquellas conductas contrarias a las políticas del este estatal. Un sector de la doctrina define el poder sancionador dado a la Administración como aquel en virtud del cual "pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada caso;

Que, se colige que la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el estado a los servidores civiles por faltas previstas en la Ley que cometen en el ejercicio de sus funciones o de la prestación de servicios, debiendo entenderse para tal efecto que las faltas de carácter disciplinario;

En ese orden, Martínez Barroso en "Diligencia y buena fe en el cumplimiento de las obligaciones laborales", prescribe que:

El deber de diligencia cumple una doble función: **positiva**, en cuanto garantía de una actividad conforme a determinadas reglas de comportamiento útil y eficaz (...), y **negativa**, en cuanto hipótesis





necesaria para la verificación de la culpa negligencia. No existe un deber de trabajar independiente al de ser diligente, sino que la obligación del trabajador es conjuntamente la de trabajar con diligencia. El trabajo prestado sin la misma, hace incurrir al trabajador en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de su prestación laboral.

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA FALTA

Que, de los hechos en los que se evidencia su participación, resulta responsable por el desempeño negligente de sus funciones, tanto en su condición de Coordinadora de Fiscalización y Tesorera, esto es al no orientar su actuar hacia el cuidado de los intereses del Estado, pues en su condición de **Tesorera**, el 25 de enero de 2023 giro a favor del Consorcio Ejecutor el pago de la valorización N° 4 de adicional de obra N° 1, correspondiente al mes de noviembre 2022, para lo cual se le remitió el expediente previamente con proveído de 26 de diciembre de 2022 al memorando N° 4501-2022-GRJ/GRI, es decir, *tardó veintidós (22) día hábiles para dicho trámite*, incumpliendo el plazo establecido en los numerales 17 al 29 del MAPRO que señala para este trámite el plazo de tres (3) días, cuatro (4) horas y cuarenta y cinco (45) minutos desde su registro y recepción del pago por el Consorcio Ejecutor, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"* situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/664,99 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.

Asimismo, en su condición de **Coordinadora de Fiscalización**, resulta responsable por haber emitido el proveído el 23 de octubre de 2023 al memorando N° 2710-2023-GRJ/GRI, a través del cual devolvió a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el expediente de la valorización N° 9 del adicional de obra N° 1 correspondiente al mes de agosto 2023 con las observaciones, la cual se le fue remitida previamente con proveído de 26 de setiembre de 2023 al mismo memorando para su atención, es decir, tardó diecinueve (19) días hábiles de su recepción, lo que incumplió el plazo establecido en los numerales 14 y 15 del MAPRO que señala un plazo total de dos (2) días desde la recepción hasta la derivación a Contabilidad, es así que, incumpliendo el plazo antes expuesto no se cauteló tampoco el establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"* situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/12,26 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.





De igual manera, en su condición de **Tesorera**, se le atribuye responsabilidad por realizar el giro a favor del Consorcio Ejecutor el 25 de enero de 2023 por la valorización N° 1 del adicional de obra N° 2 correspondiente al mes de noviembre 2022, la cual se le fue remitida previamente mediante proveído de 27 de diciembre de 2022 al memorando N° 4537-2022-GRJ/GRI de 16 de diciembre de 2022, es decir, tardó veintiún (21) días hábiles para dicho trámite, incumpliendo el plazo establecido en los numerales 17 al 29 del MAPRO que señala para este trámite el plazo de tres (3) días, cuatro (4) horas y cuarenta y cinco (45) minutos desde su registro y recepción del pago por el Consorcio Ejecutor; por lo tanto, tampoco se cauteló el plazo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además, de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observarlo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"* situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/514,17 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.



Así también, en su condición de **Coordinadora de Fiscalización**, mediante proveído de 27 de octubre de 2023 al memorando N° 2711-2023-GRJ/GRI, devolvió a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el expediente de la valorización N° 6 del adicional de obra N° 2 correspondiente al mes de agosto 2023 remitió la valorización a la Coordinación de Contabilidad para proseguir con el procedimiento según corresponda, la cual previamente se le fue remitida mediante proveído de 26 de setiembre de 2023 al mismo memorando, es decir, tardó veintitrés (23) días hábiles para realizar dicho trámite desde su recepción, lo que incumplió el plazo establecido en los numerales 14 y 15 del MAPRO que señala un plazo total de dos (2) días desde la recepción hasta la derivación a Contabilidad, es así que, incumpliendo el plazo antes expuesto tampoco cauteló el establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"* situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/27,48 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.

4.2 DE LA SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS A LA PRESUNTA FALTA DISCIPLINARIA

Que, respecto a la imputación de la presunta falta disciplinaria y la subsunción, se debe tener en cuenta lo previsto en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo — Ley N° 27444, donde se señala que por el Principio de Tipicidad sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. En consecuencia, por el Principio de Tipicidad, el cual constituye un límite a la potestad sancionadora, se debe precisar cuál es la conducta que se considera falta administrativa, disciplinaria o



penal. En ese sentido, se impone a la autoridad del procedimiento la obligación de realizar una operación de subsunción, dando así las razones por las que el hecho configura el supuesto previsto como falta, siendo lógico, que la descripción legal debe concordar con el hecho que se atribuye al servidor.

Que, asimismo se debe tener en cuenta lo señalado en el fundamento 22 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TSC, donde se establece que los órganos competentes en el procedimiento disciplinario deben describir de manera suficientemente clara y precisa, tanto al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario como al momento de resolver la imposición de una sanción, cuál es la falta prevista en la Ley que es objeto de imputación (y cuando fuere el caso, precisar la disposición reglamentaria que la complementa), cuál es la conducta atribuida al imputado que configura la falta que se le imputa, cuáles son los hechos que con base en el principio de causalidad configuran la conducta pasible de sanción; indicando además de manera precisa, clara y expresa cuáles son las normas o disposiciones, vigentes en el momento en que se produjo la falta, que sirven de fundamento jurídico para la imputación, en ese sentido tenemos.

4.2.1 RESPECTO DE LA FALTA ADMINISTRATIVA IMPUTADA

De los hechos descritos, se tiene que la imputada doña: Iris Virginia Povis Ramos en su condición de Coordinadora de Fiscalización y Tesorera del Gobierno Regional Junín, habría incurrido en la conducta infractora contenida en la Ley de Servicio Civil N° 30057, artículo 85 literal d) Negligencia en el desempeño de las Funciones.

4.2.2 DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA A LA IMPUTADA QUE CONFIGURA LA FALTA Y LOS HECHOS QUE LA CONFIGURAN

De los hechos descritos se evidencia la conducta infractora de la señora Iris Virginia Povis Ramos, quien en su condición de Tesorera y Coordinadora de Fiscalización, realizó el 25 de enero de 2023 el giro a favor del Consorcio Ejecutor por el pago de la valorización N° 4 de adicional de obra N° 1, correspondiente al mes de noviembre 2022, para lo cual se le remitió el expediente previamente con proveído de 26 de diciembre de 2022 al memorando N° 4501 -2022-GRJ/GRI, es decir, tardó veintidós (22) días hábiles para dicho trámite, incumpliendo el plazo establecido en los numerales 17 al 29 del MAPRO que señala para este trámite el plazo de tres (3) días, cuatro (4) horas y cuarenta y cinco (45) minutos desde su registro y recepción del pago por el Consorcio Ejecutor, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observarlo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"*: situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/664,99 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.

Asimismo realizó el giro a favor del Consorcio Ejecutor el 25 de enero de 2023 por la valorización N° 1 del adicional de obra N° 2 correspondiente al mes de noviembre 2022,





la cual se le fue remitida previamente mediante proveído de 27 de diciembre de 2022 al memorando N° 4537-2022-GRJ/GRI de 16 de diciembre de 2022, es decir, tardó veintiún (21) días hábiles para dicho trámite, incumpliendo el plazo establecido en los numerales 17 al 29 del MAPRO que señala para este trámite el plazo de tres (3) días, cuatro (4) horas y cuarenta y cinco (45) minutos desde su registro y recepción del pago por el Consorcio Ejecutor; por lo tanto, tampoco se cauteló el plazo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además, de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"* situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/ 514,17 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.



En su condición de **Coordinadora de Fiscalización**, emitió el proveído de 23 de octubre de 2023 al memorando N° 2710-2023-GRJ/GRI, a través del cual devolvió a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el expediente de la valorización N° 9 del adicional de obra N° 1 correspondiente al mes de agosto 2023 con las observaciones, la cual se le fue remitida previamente con proveído de 26 de setiembre de 2023 al mismo memorando para su atención, es decir, tardó diecinueve (19) días hábiles de su recepción, lo que incumplió el plazo establecido en los numerales 14 y 15 del MAPRO que señala un plazo total de dos (2) días desde la recepción hasta la derivación a Contabilidad, es así que, incumpliendo el plazo antes expuesto no se cauteló tampoco el establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"* situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/ 12,26 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.

Asimismo mediante proveído de 27 de octubre de 2023 al memorando N° 2711-2023-GRJ/GRI, devolvió a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el expediente de la valorización N° 6 del adicional de obra N° 2 correspondiente al mes de agosto 2023 remitió la valorización a la Coordinación de Contabilidad para proseguir con el procedimiento según corresponda, la cual previamente se le fue remitida mediante proveído de 26 de setiembre de 2023 al mismo memorando, es decir, tardó veintitrés (23) días hábiles para realizar dicho trámite desde su recepción, lo que incumplió el plazo establecido en los numerales 14 y 15 del MAPRO que señala un plazo total de dos (2) días desde la recepción hasta la derivación a Contabilidad, es así que, incumpliendo el plazo antes expuesto tampoco cauteló el establecido en la normativa de contrataciones del Estado, además de haber transgredido lo establecido en el MAPRO en su numeral 8 que señala: *"a) Es responsabilidad de las unidades orgánicas inmersas en el procedimiento mencionado, observar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respecto a los plazos establecidos para el pago de las valorizaciones"* situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por



S/27,48 por el reconocimiento y pago de intereses legales por la demora del pago de la citada valorización.

La conducta infractora describe se subsume en el artículo 85 literal d) **Negligencia en el desempeño de las funciones**, de la Ley del Servicio Civil N° 30057, toda vez que, incumplió las funciones del **Tesorera**, establecida en su contrato administrativo de servicios N° 105-2020-GRJ/ORAF de 30 de octubre de 2020, en cuya cláusula octava señala: a) *Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas de presente Contrato, así como con las normas y directivas internas vigentes de EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena de laboral*"

En ese sentido, la conducta infractora desplegada por la señora **Iris Virginia Povis Ramos**, ocasionó que se pague por intereses legales al Consorcio Ejecutor y causando perjuicio económico a la Entidad por S/1 218,90.

4.2.3 CULPABILIDAD Y CAUSALIDAD



De lo antes expuesto, se le atribuye responsabilidad administrativa, al haber actuado de manera negligente en su calidad de **Tesorera y Coordinadora de Fiscalización**, toda vez que contravino los plazos dispuestos en el MAPRO de la Entidad, para el pago de valorizaciones.

Sobre los hechos antes expuesto, debemos entender respecto a la negligencia en el desempeño de las funciones, que la Ley n.° 30057 - Ley de Servicio Civil, refiere que el objeto de la calificación disciplinaria es el **"desempeño" del servidor público al realizar las "funciones" que le son exigibles en el contexto del puesto de trabajo** que ocupa en una entidad pública, atribuyéndosele responsabilidad cuando se **evidencia y luego se comprueba que existe "negligencia" en su conducta laboral**. Asimismo, la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, indica en el literal d) del artículo 2, que uno de los deberes de todo empleado público que está al servicio de la nación es **"desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio**.

Sobre el particular, Martínez Barroso en "Diligencia y buena fe en el cumplimiento de las obligaciones laborales"¹⁹ prescribe que:

"(...) El deber de diligencia cumple una doble función: positiva, en cuanto garantía de una actividad conforme a determinadas reglas de comportamiento útil y eficaz (...), y negativa, en cuanto hipótesis necesaria para la verificación de la culpa negligencia. No existe un deber de trabajar independiente al de ser diligente, sino que la obligación del trabajadores conjuntamente la de trabajar con diligencia. El trabajo prestado sin la misma, hace incurrir al trabajador en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de su prestación laboral (...)"

Finalmente, se evidencia la existencia de una relación causal o vinculación de su conducta con el efecto irrogado, toda vez que, el señor **Iris Virginia Povis Ramos**, en



ejercicio de su cargo actuó con dolo en el incumplimiento de sus funciones como **Tesorera y Coordinadora de Fiscalización**, toda vez que, estaba en condiciones de cumplir los plazos establecidos en el MAPRO, causando perjuicio económico a la Entidad de S/1 218,90.

V. LA POSIBLE SANCIÓN A LA PRESUNTA FALTA IMPUTADA

Por lo expuesto, considerando que los hechos señalados ameritarían ser pasibles de sanción, se procedió a analizar la proporcionalidad de la misma en la que se evaluó cada uno de las condiciones, antecedentes, medios de pruebas y documentos que contienen el presente expediente administrativo, así como, bajo los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la presente, el suscrito en calidad de Secretario Técnico en uso de sus facultades prescritas en el numeral 8.2 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC, propone que la posible sanción que correspondería a don: **IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS EN SU CONDICIÓN DE TESORERA Y COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN**, es la de **SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES**, de conformidad al art. 88 literal b) de la Ley N° 30057².

La sanción que se opta por recomendar este despacho se basa en que don: **IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS**, entendiéndose que por el cargo que desempeñaba tenía mayor deber de conocer y cumplir la normativa con respecto a las labores que desempeña, ya que para la determinación de la sanción a las faltas la Ley N° 30057 - Ley de Servicio Civil en el artículo 87 establece en el literal c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente, en consecuencia, tenían capacidad de decisión frente acciones que puedan entenderse como perjudiciales para la entidad y en consecuencia para el estado, pero NO tuvo el cuidado debido ni previsión al momento de las conductas realizadas y que fueron perjudiciales para el estado Gobierno Regional Junín.

VI. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE PARA DISPONER EL INICIO DEL PAD

Que, en ese sentido de conformidad con lo establecido en el artículo 92° de la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil, en concordancia con el artículo 93°, numeral 93.1. Literal b) y el artículo 106° del Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el órgano que inicia el Procedimiento Administrativo Disciplinario es el Órgano Instructor y para el caso de autos se detalla:

NOMBRE DEL SERVIDOR O FUNCIONARIO	CARGO	ORGANO INSTRUCTOR	ORGANO SANCIONADOR
--	--------------	--------------------------	---------------------------



IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS	TESORERA Y COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN	GERENCIA GENERAL REGIONAL	SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
--------------------------------------	---	--	--

VII. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR

Que, del análisis de los hechos, así como de lo dispuesto por el artículo 108° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, esta Secretaría Técnica no considera necesaria la imposición de medida cautelar alguna contra de doña: **IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS EN SU CONDICIÓN DE TESORERA Y COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN del Gobierno Regional Junín**, al momento de los hechos que se le imputan.

VIII. PLAZO PARA PRESENTAR EL DESCARGO

Que, conforme al artículo 111° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el investigado puede ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que crea conveniente el cual lo hará al formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la comunicación que determine el inicio del procedimiento administrativo disciplinario;

Que, corresponde a solicitud del servidor, la prórroga del plazo, el instructor evaluará la solicitud presentada para ello adoptando el principio de razonabilidad y establecerá el plazo de prórroga. Si el Órgano Instructor no se pronuncia en el plazo de dos (02) días hábiles, se entenderá que la prórroga ha sido otorgada por un plazo adicional de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial;

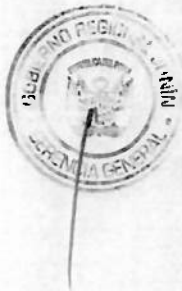
Que, si el servidor civil no presenta su descargo en el mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su defensa. Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para ser resuelto;

IX. AUTORIDAD COMPETENTE PARA RECIBIR EL DESCARGO O SOLICITUD O PRORROGA

Que, conforme a lo señalado en el numeral 16.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutivo N° 101-2015-SERVIR-PE, corresponde a la Gerencia General Regional, por ser autoridad instructiva del presente procedimiento;

X. DERECHO Y OBLIGACIONES DEL SERVIR EN EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO

Que, se precisa los derechos y obligaciones del servidor civil en el trámite del procedimiento, conforme se detallan en el artículo 96° del Decreto Supremo N° 040-





2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el servidor tiene los siguientes derechos e impedimentos:

- a) Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones.
- b) El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.
- c) Mientras dure dicho procedimiento no se le concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del artículo 153° del Reglamento mayores a cinco (05) días Hábiles.
- d) En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.

Que, por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM - Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de doña: **IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS EN SU CONDICIÓN DE TESORERA Y COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN del Gobierno Regional Junín**, por presunta responsabilidad administrativa descrita en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR a través de la Secretaria General del Gobierno Regional Junín, la presente Resolución a doña: **IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS**, así como copias de sus antecedentes que dan lugar al presente procedimiento, además de los (2) dos CDs que forman parte del expediente disciplinario; en estricta aplicación de la orden de prelación establecida en el artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General³, otorgándole el plazo de cinco

³ Artículo 20. Modalidades de notificación

20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.

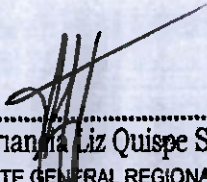
20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.



(05) días hábiles, computados desde el día siguiente de notificado el presente; a fin de que presente su descargo y anexe las pruebas que crea por conveniente para su defensa, haciendo de su conocimiento que el presente acto no es impugnable.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR, a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín, la presente resolución con el cargo de notificación debidamente diligenciado a doña: **IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS** y todos sus antecedentes, para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


CPC Mariana Liz Quispe Salas
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

C.c.
Archivo
MLQS/ELQR

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO 26 JUN 2026


Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo.

20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notificación. Puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados.